

## Alternativa para Alemania en el punto de mira

En la Alemania de posguerra la experiencia reciente del nacionalsocialismo indujo al legislador a prever la posibilidad de prohibir fuerzas políticas que atacaran los fundamentos del Estado tal como venían definidos en la Ley Fundamental. Dejaba así las puertas abiertas a ilegalizar a quienes atentasen contra el sistema democrático y confiaba al Tribunal Constitucional la potestad de decidir sobre dicha cuestión. Por supuesto, estas cautelas no pretendían impedir el desarrollo pleno del régimen de partidos, sino garantizar el ejercicio de las libertades a los ciudadanos y a sus representantes políticos.

Las prevenciones introducidas por la norma tuvieron su efecto: el 23 de octubre de 1952 el Tribunal Constitucional declaró ilegal al Partido Socialista del Reich, una pequeña organización acusada de sostener un programa racista, antisemita y contrario a los derechos humanos, todo lo cual le vinculaba con el Partido Nacionalsocialista. Casi cuatro años después, el 17 de agosto de 1956, el Tribunal hacía lo propio con el Partido Comunista de Alemania por su visión totalitaria de la vida política y social, atentatoria del orden democrático. Frente a la minúscula incidencia del Partido Socialista del Reich, la formación comunista había logrado superar el 5% de los votos en 1949, aunque en elecciones posteriores perdiera su representación parlamentaria. En la decisión final para la puesta fuera de la ley de ambas organizaciones primaba el entendimiento de que sus objetivos eran la destrucción de las instituciones y la desarticulación de la sociedad civil para facilitar su transformación en un sentido totalitario.

Aunque a lo largo de las décadas posteriores han existido intentos de prohibir algunos partidos, siempre se ha tratado de organizaciones marginales y los procesos de ilegalización no llegaron a materializarse, como en 2017 cuando el Tribunal Federal no dio el visto bueno a la prohibición del Partido Nacional Democrático, de carácter neonazi, pero insignificante. Sin embargo, la polémica ha vuelto con enorme vigor en estos últimos meses en relación con *Alternative für Deutschland*. A pesar de los favorables pronósticos, el éxito de este partido en las elecciones regionales de Sajonia y Turingia en septiembre de 2024 fue una sorpresa que atizó las conciencias biempensantes de muchos europeos. El canciller Olaf Scholz lo calificó en aquellos días de «preocupante» y la inquietud se extendió todavía más por los despachos de Bruselas tras el avance de las fuerzas de derecha en las últimas elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024.

Era evidente que la solidez del sistema de partidos alemanes después de la Guerra Fría (si consideramos también la incorporación posterior de Los Verdes) se había erosionado. No solo la reunificación del país después de la caída del Muro de Berlín en 1989, sino las transformaciones provocadas por los cambios en la geopolítica internacional y en la propia evolución interna habían modificado las condiciones de base. Nadie podía pensar hace pocos años que el Gobierno alemán se planteara la posibilidad de reimplantar el servicio militar como consecuencia de la crisis vivida por la OTAN y por el distanciamiento de Washington, así como el aumento de efectivos y de recursos para el *Bundeswehr*, todo ello además inducido por la quiebra del modelo de seguridad basado en la energía barata (en 2020 el 55% del gas importado provenía de Rusia). En 2023 la economía alemana, el consabido motor de la europea, se resentía: el Producto Interior Bruto caía un 0,2%, y siguió su marcha descendente al año siguiente a la par que la calidad reconocida de muchos productos manufacturados alemanes perdía mercado ante la competencia de las exportaciones chinas. La incertidumbre ante el futuro calaba en la población alemana como en la europea en general.

El gobierno socialdemócrata de Scholz centró su atención en mejorar el proceso de digitalización en la

administración y los servicios -que había quedado rezagado respecto a muchos de sus socios europeos-, en la lucha contra el cambio climático y en la paulatina transformación del sistema educativo, un programa estrechamente relacionado con las prioridades de la agenda europea de Von der Leyen que no entusiasmó a la ciudadanos alemanes, mucho más preocupados por la inmigración ilegal, la vivienda y las desigualdades económicas atribuidas por muchos a la deslocalización industrial fruto de la globalización.

Las elecciones generales celebradas el 23 de febrero de 2025 fueron un termómetro de cómo se sentía la ciudadanía ante una Alemania y una Europa muy menguadas en su capacidad de influencia en un mundo muy convulsionado. La alta participación (el 82,5% de la población con derecho a voto) reflejaba la profunda politización del momento. Los cristianodemócratas de la *CDU* ganaron con un 28% de los votos, mientras Alternativa para Alemania alcanzaba el 20,8% y 152 de los 630 escaños del *Bundestag*, convirtiéndose en el segundo partido, mientras la socialdemocracia del *SPD* se hundía con un 16,4%, nueve puntos menos que en los anteriores comicios. Ante el estupor de muchos, *AfD*, que había sido vapuleado por la inmensa mayoría de los medios de comunicación y criticado severamente por los líderes del resto de partidos políticos, lograba el apoyo de más de 10 millones de alemanes de toda condición social, muy especialmente en los *länder* del Este. Sus líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla, habían adquirido notoriedad como representantes de una alternativa real en contra de la élite política e incluso económica que manejaba los resortes del poder en el país. Habían logrado que los partidos tradicionales tuvieran que introducir en sus agendas temas enormemente conflictivos, poco gratos para ellos y que habitualmente trataban de esquivar, como la inmigración, los problemas generados por la globalización económica y la desindustrialización (con el aumento del paro y de los problemas sociales), así como las consecuencias de la guerra en Ucrania. Alternativa insistía mucho más en problemas cotidianos como la falta de inversión en vías férreas, carreteras, y servicios básicos en general, a la vez que criticaba el descuido gubernamental respecto a las necesidades reales de la población mientras Alemania figuraba en el primer puesto de contribuyente neto de la Unión Europea. La inmigración ilegal y la generosa legislación de la República Federal permitía que en 2024 vivieran cerca de 3,5 millones de refugiados, sobre todo en los estados orientales en donde los hijos y nietos de los «perdedores de la unificación» veían que su situación socioeconómica no acababa de asemejarse a la de los ciudadanos del oeste. Los problemas de convivencia habían crecido mucho en todo el territorio.

A pesar del aislamiento al que le sometían el resto de las fuerzas y la permanente campaña en contra de los medios de comunicación, la alarma entre las élites políticas y económicas alemanas saltó definitivamente tras conocerse el resultado electoral. El nuevo canciller federal, el democristiano Friedrich Merz, reiteró su rechazo a Alternativa, manteniendo en la práctica el cordón sanitario sobre el partido mientras llegaba a un acuerdo con el *SPD* para formar gobierno. A su vez, el cerco sobre el partido de Weidel daba un salto cualitativo. En 2022, Alternativa había sido tildada de «caso sospechoso de extremismo de derecha» en algunos de los estados federados como en Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt, pero el 2 de mayo de 2025 la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que operaba desde 1950 vinculada al Ministerio de Interior, dio a conocer un informe de más de mil páginas en donde sin eufemismos calificaba a la organización como de extrema derecha y abría la posibilidad de vigilar sus actividades en vista incluso a su futura ilegalización. El informe se fundamentaba en la teoría de la «democracia defensiva» y hacía afirmaciones como que *AfD* tenía una idea «étnico nacional del pueblo» que dejaba fuera a grupos amplios de la población, atacando su dignidad como personas. Además, el documento ponía el foco de atención en lo que entiende como una agresiva política antiinmigración, sobre todo respecto a los musulmanes.

El inicio del proceso para una prohibición del partido queda en manos de las cámaras parlamentarias y del Tribunal Federal, pero es difícil que pueda prosperar. Se han alzado voces como la del propio Scholz, que ha declarado que una prohibición sería precipitada jurídicamente y muy difícil de lograr teniendo en cuenta la historia reciente; cristianodemócratas y liberales también se muestran reacios. De igual forma, constitucionalistas destacados han manifestado su clara oposición; uno de los más reconocidos, Dietrich Murswiek, ha afirmado que la puesta fuera de la ley del partido no tendría fundamento legal. Muy vehemente ha sido el vicepresidente norteamericano J.D. Vance atribuyendo la responsabilidad del intento a una vieja élite que quiere volver a erigir un Muro de Berlín, mientras Marco Rubio, el secretario de Estado, ha hablado de la posibilidad de prohibición en términos de tiranía disfrazada.

Realmente resulta difícil de asumir que una organización con más de diez millones de votos, la segunda más votada en las últimas elecciones y a la que encuestas posteriores sitúan en la primera posición, pueda ser ilegalizado por los motivos aducidos. La *AfD* representa la voluntad de un amplísimo espectro de ciudadanos alemanes con unos planteamientos políticos similares a otros que forman parte del Gobierno de sus países o lo apoyan como en Hungría, Italia o Suecia, por citar solo algunos ejemplos; partidos que han quebrado definitivamente el sistema heredero de la posguerra mundial y que generan un enorme malestar en las viejas estructuras de poder.